



CAMPO Y CAMPESINOS EN LA ESPAÑA MODERNA

CULTURAS POLÍTICAS EN EL MUNDO HISPANO

MARÍA JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ
ALFREDO MARTÍN GARCÍA

(EDS.)

[ENTRAR]

CRÉDITOS

CAMPO y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico (Multimedia)/María José Pérez Álvarez, Laureano M. Rubio Pérez (eds.); Francisco Fernández Izquierdo (col.). – León: Fundación Española de Historia Moderna, 2012

1 volumen (438 págs.), 1 disco (CD-Rom): il.; 24 x17 cm.

Editores lit. del T. II: María José Pérez Álvarez, Alfredo Martín García

Índice

Contiene: T. I: Libro – T. II: CD-Rom

ISBN 978-84-938044-1-1 (obra completa)

ISBN T. I: 978-84-938044-2-8 (del libro)

ISBN: 978-84-938044-3-5 (CD-Rom)

DEP. LEG.: LE-725-2012

1. Campesinado-España-Historia-Edad Moderna 2. Culturas políticas-España-Historia I. Pérez Álvarez, María José, ed. lit. II. Rubio Pérez, Laureano M., ed. lit. III. Martín García, Alfredo, ed. lit. IV. Fernández Izquierdo, Francisco, col. V. Fundación Española de Historia Moderna. VI.

323.325(460)''04/17''

316.74:32(460)

Edición:

Fundación Española de Historia Moderna
C/Albasanz, 26-28 Desp. 2E 26, 28037 Madrid (España)

© Cada autor de la suya

© Fundación Española de Historia Moderna

© Foto portada: *Mataotero del Sil*

Editores de este volumen:

María José Pérez Álvarez

Alfredo Martín García

Coordinación de la obra:

María José Pérez Álvarez

Laureano M. Rubio Pérez

Alfredo Martín García

Colaborador:

Francisco Fernández Izquierdo

Imprime:

Imprenta KADMOS

Compañía, 5

37002 Salamanca

[VOLVER]

Cañadas y *libertad de tránsito* de la Mesta en la segunda mitad del siglo XVI¹

Fermín Marín Barriguete
Departamento de Historia Moderna
Facultad de Geografía e Historia (UCM)
realconcejodelamesta@gmail.com

Resumen

La *libertad de tránsito* de la Mesta suponía la completa movilidad de los rebaños, con la excepción de las *cinco cosas vedadas*. A partir de 1550 asistimos a profundos cambios rurales, y lo que antes eran *cañadas abiertas* se convirtieron en *cañadas cerradas* o amojonadas. La *libertad de tránsito* comenzó a desaparecer y con ella se inició la decadencia de la trashumancia. La red viaria soportó roturaciones, acotamientos y traslados y la Cabaña Real se enfrentó a una escalada de la conflictividad sin precedentes, causa de la asunción de nuevos apeos y la toma de medidas fallidas. No se podía contar con el amparo de la Corona, ajena al heredado *proteccionismo* y responsable del incumplimiento legislativo. A finales del siglo XVI, apenas quedaban reconocidos las principales arterias migratorias y algunos ramales secundarios, pero nadie recordaba las ancestrales *cañadas abiertas*.

Palabra clave

Cañadas; libertad de tránsito; Mesta; siglo XVI.

Cañadas and *libertad de tránsito* of the Mesta in the second half of the 16th century

Abstract

The *libertad de tránsito* of the Mesta supposed the whole mobility of the herds, with the exception of the *cinco cosas vedadas*. From 1550 deep rural changes take place, and what earlier were *cañadas abiertas* they turned into *cañadas cerradas* or amojonadas. The *libertad de tránsito* began to disappear and with her the decline of the trashumancia started. The road network supported ploughings, enclosed fields and transfers and the Cabaña Real faced a rise of the conflicts without precedents, cause of the assumption of new surveys and unsuccessful steps taking. It was not possible the support of the Crown, unaware of the inherited *proteccionismo* and responsible for the legislative breach. At the end of the XVIth century, scarcely the main migratory ways and some secondary branches remained recognized, but nobody remembered the ancestral *cañadas abiertas*.

Key words

Cañadas; *libertad de tránsito*; Mesta; 16th century.

Cañadas abiertas y cañadas cerradas

A mediados del siglo XVI, la voz *cañada* todavía conservaba los dos significados primigenios de los privilegios fundacionales. Por un lado, era sinónimo de *libertad de tránsito* sin limitación, menos en las *cinco cosas vedadas*², constituía la esencia de la trashumancia, simbolizaba el alcance y vigencia de la legislación protectora y desbarataba cualquier reivindicación o pleito en contrario; estamos ante las *cañadas abiertas*. Por otro, *cañada* también admitía la consideración de paso excepcional por rutas amojonadas entre esas *cinco cosas vedadas*, las *cañadas cerradas*,

¹ Trabajo financiado por el proyecto HAR2011-27919 (Ministerio de Economía y Competitividad).

² Panes, viñas, huertas, prados de guadaña y dehesas boyales.

caminos exclusivos de los cabañiles en orden a sus prerrogativas y con la finalidad de posibilitar el acceso a los pastos disponibles en barbecheras, rastrojeras o prados. Esta segunda situación derivada de la anterior, suponía una variante particular que ampliaba el radio jurisdiccional ganadero, optimizaba recursos a favor de los trashumantes y ahondaba en la interpretación y ejecución de los códigos pecuarios. Nunca fue para la Cabaña Real una alternativa u opción anuladora de los principios originales, ni invalidaba el libre paso y pasto por el término municipal o comarca³. Además, lógicamente, las *cañadas cerradas* terminaban en las lindes de los cotos y enlazaban con las *cañadas abiertas*.

Las confirmaciones generales de Carlos I, el 9 noviembre de 1525, y Felipe II, el 6 diciembre de 1562, no variaron un ápice los contenidos del aparato jurídico heredado y repitieron con exactitud lo dispuesto por los Reyes Católicos el 26 de mayo de 1489⁴. En consecuencia, no hubo cambios normativos, que rompieran el obligado *proteccionismo regio* inherente a los privilegios, y tampoco modificaciones formales en la legislación promulgada; de hecho, fueron meras copias en argumentación, planteamientos y objetivos. Se produjo, así, el traslado del polo de la conflictividad de la Corte e instituciones al mundo rural, donde las actuaciones no estaban tan condicionadas por las prerrogativas y la Cabaña Real se hallaba en franca desventaja.

La Mesta perdió el pulso en la segunda mitad del siglo XVI y, hacia 1560, ya había asumido la necesidad de la relajación jurídica por las dificultades interpuestas a la trashumancia. Llegó un momento en que debió ceder cuando la contestación amenazaba con cercenar circuitos, clausurar herbazales y agraviar a los pastores. Hizo concesiones para garantizar desplazamientos y disfrutes, acallar protestas y aflojar tensiones, pero con el firme propósito de eliminar restricciones y recuperar movilidad, y nunca aceptó la derrota. Vecinos y pueblos tomaron por bandera la negativa de reconocimiento de las *cañadas abiertas* y se atrincheraron en la única existencia de *cañadas cerradas*, y en ocasiones. Esta interpretación conculcaba los códigos pecuarios y separaba *itinerarios de libertad de tránsito*, al identificar los primeros con rutas amojonadas y la segunda con aprovechamiento fortuito y controlado de tierras públicas. Además, el acato de las *cañadas abiertas* hubiera supuesto someterse a la jurisdicción *universal* cabañil, a lo que ni particulares ni instituciones estaban dispuestos.

Con el nuevo significado de las *cañadas cerradas* fraguado a principios del quinientos, trashumantes, rebaños y prerrogativas se constriñeron a derroteros incuestionables y definidos, donde resultaban más vulnerables, convirtiéndose en el blanco de ocupaciones, sembrados, cierres, derechos o prendas. Los fundamentos y argumentos se encontraron en los usos y ordenanzas municipales, instrumentos utilizados para neutralizar los privilegios, a los que relegaron a un segundo plano desoyendo los alegatos de preeminencia. Numerosos cabildos rescataron o elaboraron instrucciones con la intención de regular, entre otras cuestiones, la actividad agropecuaria, normalizar el aprovechamiento pasteño y ordenar la fiscalidad y las sanciones. El objetivo último radicaba en alcanzar la autonomía ganadera, que rechazaba ingerencias de cualquier tipo, en especial la jurisdicción de la Mesta; de ahí que nunca reconocieran la *libertad de tránsito*.

Por supuesto, los reglamentos locales no recogían en sus capítulos nada concerniente a la Cabaña Real, salvo las multas por daños de hatos foráneos en acotados. Tampoco se hacían eco de las inmemoriales *cañadas cerradas* por sus términos, que confluían con los caminos y sendas

³ Veredas, cordeles o sendas tenían en estos casos el mismo sentido que las cañadas.

⁴ *Cuaderno de leyes de Mesta de 1731, Confirmaciones generales*, AHN, A. de Mesta, libro 297, pp. 231 y ss.

de la localidad, y sólo otorgaban a los trashumantes el paso en determinadas épocas, pero sin exclusividad. En consecuencia, estos visitantes ocasionales no ganaban derecho alguno, se toleraban por interés particular o constancia irrefutable y estaban sometidos a cambios de trazados o estrechamientos viarios.

No cabía duda, las ordenanzas municipales perseguían la protección de la agricultura y, tangencialmente, el desarrollo de la crianza estante, erigiéndose en feroces defensoras. Con carácter general, salvaguardaban panes, dehesas, viñedos, olivares o arbolado de la intromisión de los cabañiles y riberiegos mediante prendas y correctivos y soterraban las *cañadas cerradas* bajo multitud de disposiciones anuladoras de las leyes mesteñas⁵. Pronto quedó muy claro que la trashumancia comportaba adaptación y asunción de las condiciones comarcanas si no se pretendía destapar violentos conflictos, muy perjudiciales por la detención de las marchas, las confiscaciones en calidad de fianzas, las agresiones a pastores y animales y las penurias y pérdidas derivadas de la ausencia de pasto. No faltaban los guardas colocados en sitios estratégicos de los itinerarios que, mediante coacciones diversas, convencían a los hermanos de apartarse de los nuevos adeshados, terrenos con frecuencia comunitarios o recién labrados, y proseguir la migración hacia los herbazales de destino. Se buscaba el aislamiento de las zonas cercanas a las *cañadas cerradas* transitadas por los cabañiles para convertirlas en tierras de libre disposición del ayuntamiento, siendo significativas las roturaciones en los montes y la respuesta de la Mesta en los juzgados⁶.

Visitas y apeos

¿Existía un mapa de cañadas amojonadas legítimo y confirmado? No. Los caminos pecuarios se alteraban por diferentes cuestiones, y hasta desaparecían, cuando los alcaldes entregadores, insuficientes y con audiencias dispersas, no los medían con regularidad, algo inusual al abrirse sus tribunales de acuerdo con las denuncias presentadas en las juntas generales y las comisiones con los casos graves. También influyeron en el desconocimiento las roturaciones y cierres, que mudaban los mojones, condicionaban los apeos y confundían a los agrimensores. Los cabildos y vecinos hicieron lo imposible por contrarrestar la presencia de los rebaños mesteños porque iban acompañados de la jurisdicción especial, ignoraron las rutas en las ordenanzas y negaron el paso, cada vez con más éxito, a todos los ganaderos esgrimidores de la vigencia de los privilegios. Los pastores callaban las infracciones para no sufrir represalias, únicamente sabían los trazados habituales hacia determinados pastizales y no les importaban el estado de otros itinerarios. Sólo permanecían las principales arterias usadas por hombres y mercancías.

Hacia 1550 las ocupaciones y desvíos de la mayoría de las cañadas evidenciaban el fracaso del precario y fallido sistema de amojonamiento, que facilitaba la merma definitiva de gran parte del tejido circulatorio. No había normas prefijadas resultantes de la experiencia y adaptadas a la realidad agraria, pues los alcaldes entregadores no estaban obligados a depositar sus relaciones y presentaban listados de pleitos justificadores de los salarios. Es decir, los magistrados actuaban

⁵ Un buen ejemplo para conocer la situación en los extremos es CLEMENTE, J. (2004). “Las Ordenanzas de Mengabril de 1548”. *Revista de estudios extremeños*, 60, 2, pp. 597-650.

⁶ Así sucedió con las villas vallisoletanas de Nava del Rey, Medina del Campo y Pollos o las palentinas de Palenzuela, Támara o Vertabillo; RAMOS, J. M^a. (2005). “Fuentes historiográficas para el estudio e interpretación de los montes y sus aprovechamientos: su aplicación en Castilla y León (ss. XVI-XX)”. *Investigaciones geográficas*, 36, pp. 43-60, p. 57.

conforme a criterios individuales, se limitaban a abrir y a devolver al libre paso y pasto las cañadas, eludían tensiones y retos y tendían a amonestar y no a castigar. Carecían de identificación con los privilegios y no tenían conciencia precisa de la importancia de su labor en el sostén de la trashumancia, siendo llamativos los incumplimientos legislativos en beneficio de los oponentes a la Cabaña Real. Al mismo tiempo, la falta de compromiso llevaba a acciones aisladas de los antecesores y a rehusar servir de fundamento en el ejercicio del oficio a sus sucesores. La clamorosa ausencia de testimonios documentales avaladores de las reivindicaciones cañadiegas de la Mesta imposibilitaba sentencias ejemplares, comportaba pérdida de juicios y disuadía de actitudes beligerantes para aumentar el entramado viario y extender la jurisdicción.

La exagerada conflictividad distorsionó en la segunda mitad del quinientos la finalidad de las visitas: el reconocimiento de las cañadas. Lo que era prioritario pasó a un segundo plano por el protagonismo adquirido por las roturaciones, prendas o impuestos. Delitos consustanciales a la *libertad de tránsito* cuando tenían carácter excepcional, acababan, descontrolados, por asfixiar la trashumancia y se convirtieron en la principal tarea de los alcaldes entregadores. Monopolizaron el trabajo en las audiencias, mientras las inspecciones viarias caían en inercias y adolecían de rigurosidad la mayoría de las veces. No sólo hubo resistencias a la *libertad de tránsito* en las cañadas y veredas de dudosos mojones en espacios abiertos, sino también en arterias pecuarias estáticas y ancestrales por la propensión al desvío por zonas alejadas y de mala calidad, penalizándose a los rebaños que sobrepasaban los linderos marcados al salir a comunales y concejiles. Tales prácticas urgieron la reglamentación de las visitas con el propósito de recabar información irrefutable para fundamentar procesos y reclamaciones. Sin embargo, el verdadero motivo de la relegación examinadora estuvo en que despertaban la oposición de cabildos y vecinos porque evidenciaban la presencia de la Cabaña Real en el término municipal y la vigencia de su aparato jurídico.

Hasta 1550 no se tipificó el modelo de amojonamiento y, al menos en teoría, se decidió procedimiento, fases y participantes, con lo que se avanzó en la normalización de los apeos⁷. Sobresalía la rigurosa reglamentación de las preguntas a los testigos, en cuyas declaraciones se basaban el alcalde, fiscal y procurador para formular la sentencia⁸. Después, se exponían las acusaciones particulares contra los infractores, el fiscal argumentaba y probaba la inculpación, los acusados declaraban y se pronunciaba el veredicto, formado por el mandato de dejar libre y desocupada la cañada o vereda, la advertencia contra la reincidencia bajo pena de diez mil maravedíes y la sanción monetaria. Apenas se encontraban fallos absolutorios al actuar tras la denuncia y los sólidos indicios.

Lo que indujo a la Mesta a regularizar las visitas fue el avance rápido y desmedido de las roturaciones de cañadas, cuyo volumen sobrepasaba con creces al de otros delitos. A mediados de la centuria, la frecuente clausura de la red caminera local por baldíos, ejidos o comunales ponía en serio peligro la movilidad de los rebaños y las prácticas trashumantes. Había que actuar con urgencia contra un fenómeno tan amenazador, que obligó a tomar medidas para conservar el entramado viario disponible. El número medio de entradas o rompimientos había aumentado en las últimas décadas en las audiencias y eran más extensos. La Provisión de 1509 se manifestaba obsoleta porque multaba con 300 maravedíes cada ocupación, grande o pequeña, y alentaba la

⁷ KLEIN, J. (1981). *La Mesta*. Madrid: Alianza, p. 111.

⁸ *Apeos y Visitas de Cañadas*, AHN, A. de Mesta, libro 362, fol. 267.

reincidencia⁹ o el desacato de los dictados de los alcaldes entregadores¹⁰. La mayoría de los culpados no abandonaban los cultivos y continuaban en años sucesivos, aunque tuvieran que abonar algunas cantidades en concepto de castigos. Excepcionalmente, se aplicaba la orden de *pastar los sembrados* ilegales, temerosos los magistrados cañadiegos de abanicar conflictos. Sin embargo, sí recogieron testimonios y evidencias en las relaciones elaboradas al terminar el oficio; por ejemplo, los 210 amojonamientos del Partido de Soria en 1550¹¹. En este contexto, la Cabaña Real aparcó la política expansionista de apertura de nuevas cañadas y se concentró, en ocasiones, en rescatar itinerarios factibles.

Las Provisiones de 20 de marzo de 1551 y 23 de enero de 1552, que devolvían al pasto los términos públicos y concejiles ocupados en los diez últimos años¹², dieron un gran impulso a la Mesta en la pugna por recuperar las vías pecuarias perdidas. Todo parecía indicar que la protección regia iba a frenar el avance roturador y la conculcación de privilegios en beneficio de la trashumancia y se adoptaron acuerdos tendentes a proporcionar respaldo documental a los jueces en los litigios, aumentar el rigor en las visitas y declarar la vigencia de los códigos cabañiles en cualquiera de las sentencias y amonestaciones¹³. Se impulsaron los amojonamientos generales y las mediciones alcanzaron majadas, abrevaderos, descansaderos, coladas, cordeles o veredas, antes postergados y olvidados y ahora invadidos por los cultivos.

Las ocupaciones: de la roturación al coto

La Provisión de 1554

La etapa de ilusoria bonanza enmarcó uno de los hitos legislativos mesteños: la Provisión de 16 de enero de 1554, también denominada *provisión de las multas*. Muy importante porque varió las sanciones por rompimiento o coto ilegal, tasados en función de la extensión afectada a razón de 500 maravedíes por fanega y no por unidad, pretendió corregir la proliferación de roturas, sirvió de referencia en la totalidad de los pleitos, unificó los criterios de actuación de los alcaldes entregadores, frenó la pérdida de cañadas y pastizales, redujo la fiscalidad clandestina y los adhesamientos, empujó al cumplimiento de los privilegios, restauró la *libertad de tránsito* tras su aplicación, preceptuó la norma de pacer los sembrados y redobló, sin eximentes, las penas en las reincidencias y puso a disposición de la justicia ordinaria a los recalcitrantes. Los efectos fueron más o menos duraderos según los capítulos, pero, sin duda, supuso un puntal imprescindible en la conservación de la trashumancia y en especial del entramado viario. Incluso, la voluntad de ejecutarla de forma eficaz se plasmó en que los alcaldes entregadores percibían la mitad de las cuantías, les responsabilizó del cumplimiento y se insertó en las comisiones¹⁴.

⁹ Sobresalía, por ejemplo, la villa de Montoro (Córdoba); *Ejecutorias*, AHN, *A. de Mesta*, leg. 134, exp. 1.

¹⁰ *Relaciones de alcaldes entregadores*, AHN, *A. de Mesta*, libro 438, pp. 231 y ss.

¹¹ *Ibidem*, libro 438, fols. 38 y ss.

¹² *Ordenanzas*, AHN, *A. de Mesta*, leg. 241, exp. 45.

¹³ *Acuerdos del Honrado Concejo de la Mesta*, AHN, *A. de Mesta*, libro 503.

¹⁴ *Abecedario de provisiones sobre la Mesta que se encuentran en el Archivo de Simancas*, AHN, *A. de Mesta*, libro 267, fols. 77 y ss. Lógicamente, hubo bastante resistencia y fueron necesarias varias disposiciones conminatorias; *Ordenanzas*, leg. 241, exp. 49.

El campo pronto se recuperó y la Provisión de 1554, aunque condicionó e influyó en bastantes cuestiones, fracasó en la extinción de los cultivos cañadiegos, que aumentaron progresivamente a pesar de las mayores multas. En las décadas siguientes crecieron las fanegas ocupadas y la extensión, decenas de infractores eran condenados por labrar cientos de fanegas. Así, en 1575 la visita de los términos toledanos de Consuegra, Madridejos y El Toboso se saldó con 129 sanciones y 232 entradas y sembrados de diversa consideración¹⁵. Por su lado, los cabildos protagonizaron roturas en pastizales y cañadas por la alta rentabilidad en los primeros años y sirvieron de ejemplo para los vecinos, empujados a su vez por el hambre de tierras. Asimismo terminó la colaboración de los pueblos con los alcaldes entregadores, pues las inflexibles instrucciones salidas de las juntas generales chocaban con los intereses locales¹⁶ porque incluían diversidad de zonas nunca amonajadas. Por ejemplo, el apeo de la jurisdicción de Huete (Cuenca) en 1567 concluyó con 98,6 fanegas, repartidas en 107 roturas, que abarcaban barbechos, rastrojos, arboledas, viñedos, corrales, prados de guadaña, dehesas y ejidos¹⁷. La Provisión de 1554 llegó demasiado tarde y nació obsoleta en apartados medulares como en la evaluación de las penas, poco disuasorias frente a los nuevos plantíos de viñedos y olivares, muy beneficiosos a los labradores y muy nocivos para la Mesta por el carácter permanente eliminador de la *libertad de tránsito*, que convertían en cotos lo otrora abierto al paso y pasto.

Medidas y resultado

La Cabaña Real no podía permanecer impasible ante la conculcación de sus códigos y ordenó que las comisiones se centraran en la inspección de vías pecuarias, llegando a representar hasta el 95% de las multas¹⁸. En 1574 se recaudaron en el capítulo de las cañadas 519.289 maravedíes en el Partido de León, 430.776 maravedíes en el Partido de Soria y 307.884 maravedíes en el Partido de Cuenca, que ascendieron a 898.918 maravedíes al año siguiente. En correspondencia con la concentración de esfuerzos para salvar las cañadas, los magistrados recogieron mandatos expresos de pacer los sembrados desde la primera sentencia con la pretensión de escarmentar a los acusados y desalentar a los indecisos¹⁹. El imparable fenómeno roturador aconsejaba disposiciones drásticas y el 15 de febrero de 1567 se acordó que los alcaldes entregadores no clausuraran la audiencia sin pastar las siembras; también en 1568 los procuradores fiscales recibieron el encargo de presentar la documentación precisa en la inauguración de los tribunales para que constara la obligación de dejar paso a los rebaños²⁰.

Fallaron las medidas disuasorias y sancionadoras de la Mesta al revelarse insuficientes en el control de las reincidencias, multiplicadas sin pudor y con arrogancia en un clima de permanente inobservancia de los privilegios de tránsito²¹. Casi siempre, la simple ampliación del radio de las visitas más allá de los principales caminos descubría la profundidad del problema porque no sólo se cerraban las cañadas o sendas, sino que se engullía por los cercados o el arado el área

¹⁵ *Relaciones de alcaldes entregadores*, libro 436, fol. 1.

¹⁶ *Ordenanzas*, leg. 241, exp. 66.

¹⁷ *Apeos y Visitas de Cañadas*, libro 355, fol. 248.

¹⁸ *Relaciones de alcaldes entregadores*, libro 439, fol. 241.

¹⁹ *Ibidem*, libro 440, pp. 171 y ss.

²⁰ *Cuaderno de leyes de Mesta de 1731*, segunda parte, título LII, capítulo XVIII, pp. 275 y ss.

²¹ *Relaciones de alcaldes entregadores*, libro 436, fols. 85 y 140.

circundante con muladares, zahúrdas, colmenares, hornos, huertos o lavaderos, construcciones y usos demostrativos de la intención de permanencia indefinida y la pérdida definitiva del paso y pasto. Con el tiempo, acababa por declararse la *redonda* municipal, que comportaba la supresión de cañadas y visitas y la fijación de tributos a los transgresores. Para defenderse, los ocupantes respondían con agresividad a la presencia de los rebaños foráneos, maltrataban y penaban, y desoían cualquier reivindicación, en especial de la Mesta. La crispación y los enfrentamientos retraían a los alcaldes entregadores de abrir audiencias, esperaban a la conclusión de litigios o firma de avenencias y renunciaban a los recorridos conflictivos.

Con el respaldo legislativo de los códigos, la *libertad de tránsito* era confirmada sin demasiados esfuerzos en los tribunales, abundando las ejecutorias²². Sin embargo, se dieron dos circunstancias que restaron eficiencia procesal: por un lado, apenas se obedecieron las disposiciones con la disculpa del clima de contestación general y la frecuente arbitrariedad; por otro, la Cabaña Real carecía de recursos burocráticos suficientes como para abarcar el número de pleitos, castigar los desacatos y conminar sin reservas a la asunción de los privilegios. En el mejor de los casos, los cabildos y vecinos toleraban el encasillamiento de los rebaños mesteños por circuitos delimitados y transitados, que enfajaran las marchas en la dirección deseada, pero nunca soportaban las *cañadas abiertas* y menos avanzada la segunda mitad del siglo XVI cuando ya se rechazaban impunemente y con éxito. El entramado viario cambiaba a velocidad vertiginosa y las *cañadas abiertas* desaparecían sin dejar rastro. El Honrado Concejo reaccionó y, antes de permitir que se esfumaran esos itinerarios ancestrales donde no se recuperaba la plena *libertad de tránsito*, prefería amojonar nuevas zonas, optando por las *cañadas cerradas* para salvaguardar su jurisdicción, e iniciar ciertas modificaciones administrativas tendentes a completar los apeos²³.

Confiados en la protección deparada por su aparato jurídico, los cabañiles actuaban demasiado tarde y asumían situaciones en último extremo, y una vez fallida la aplicación de los códigos, inconscientes de que fortalecían la oposición y después resultaba imposible frenar los delitos, enraizados. No hubo reparo por cabildos, nobleza, Iglesia o demás instituciones en animar las ocupaciones de cañadas y tampoco dudaron en otorgar licencias particulares con el propósito de roturarlas²⁴. Los alcaldes entregadores y jueces especiales se lanzaron a la anulación de estos permisos, ilegales a todas luces, aunque toparon con el muro de alegaciones: facultades de imposible comprobación, *inmemorialidad*, jurisdicciones o existencia de ordenanzas locales.

El significado y contexto de la adquisición del oficio de alcalde entregador

Tras la compra del oficio por la Mesta en 1568²⁵, los magistrados cañadiegos, único nexo válido con el mundo rural, se convirtieron en el principal instrumento de lucha contra las infracciones y la relegación, papel adjudicado en las *Instrucciones del licenciado Atienza*. El traspaso no cambió en nada la procedencia de los nombrados, escogidos de los escalones bajos de la administración central, ajenos a la ganadería, temporales y sin identificación con los privilegios. Eran

²² *Ejecutorias*, leg. 154, exp. 6; leg. 214, exps 7 y 9; leg. 104, exp. 1.

²³ *Relaciones de alcaldes entregadores*, libro 436, fols. 18 y ss.

²⁴ *Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731*, primera parte, privilegio LIX, capítulo II, p. 197.

²⁵ *Mandatos, providencias y otras órdenes del Honrado Concejo de la Mesta (1548-95)*, AHN, A. de Mesta, libro 328. Véase MARÍN, F. (1999). "Una fecha clave para la Historia Agraria: la compra del oficio del alcalde mayor entregador en 1568". En PEREIRA, J.L. (coord.). *Felipe II y su tiempo*. Cádiz, pp. 165-176.

jueces con capacidad decisoria en asuntos desconocidos, no dispuestos a enfrentarse a la sociedad agraria descontenta y conscientes de hallarse en una fase transitoria de su carrera burocrática. Por supuesto, perfilar las funciones significó un notable adelanto en los recursos disponibles y en el control de los delitos, pero no eliminó los gravísimos efectos por ser un elemento exógeno. Las *Instrucciones* radiografiaron la coyuntura pecuaria, justificaron una tímida recuperación en la siguiente década y no remediaron la decadencia institucional²⁶.

Fiscales, procuradores y vocales denunciaban en las juntas generales la continua sangría sufrida en la red migratoria. Durante el ejercicio del licenciado Berlanga en 1568, en el Partido de León, el 96,9% de las multas impuestas fueron por cierres y roturas en cañadas y pasos²⁷. Al amparo de los necesarios y urgentes amojonamientos, se habían empezado a apeaar tierras públicas y concejiles, las otrora *cañadas abiertas*, para garantizar el paso de los rebaños al menos por vías delimitadas y contener la conversión en adehesados. Pronto quedaron al descubierto las aspiraciones de los mesteños, más evidentes tras la compra del oficio de alcalde entregador, y que consistían en ampliar en lo posible la trama cañadiega, y con ella la jurisdicción, al verse forzados a transigir con la delimitación de las *cañadas cerradas*. La previsible escalada de la conflictividad agudizó el deterioro de las condiciones de la trashumancia, imparable cuando los alcaldes entregadores ejecutaban con rigor sus funciones y pronunciaban fallos ejemplarizantes. Estas sentencias abanicaron la *leyenda negra* por los abusos de los magistrados desatentos con los argumentos defensores. Poco importaba que los alegatos de inocencia se sustentaran sobre falsas o caducadas licencias de roturación, testimonios vecinales interesados, antiguas absoluciones fraudulentas o pobreza crónica.

La reacción contraria no se hizo esperar y cristalizó en un frente de oposición, cuyos objetivos prioritarios consistieron en rechazar cualquier nuevo amojonamiento y adelgazar al máximo el tejido viario general. Los pueblos cerraron el término a los alcaldes entregadores si no existía constancia escrita de visitas regulares, invalidando como precedente las esporádicas. Procedimiento de sobra conocido, la Mesta sufría otra vez las consecuencias del deficiente funcionamiento institucional por el negligente cumplimiento de sus acuerdos internos. Se había conminado a los procuradores fiscales de las audiencias con la perentoriedad de obedecer la orden de aportar el archivo legal y procesal preciso en cada tribunal para fundamentar las sentencias, acabar con absoluciones por falta de pruebas y deslegitimar las manifestaciones de los implicados.

En teoría, la Confirmación General filipina de 1562 atenuaba el vigor de la deseada autonomía pecuaria y exigía el cumplimiento de las leyes y privilegios. Sin embargo, no fue así: no hubo *proteccionismo regio* y nunca retrocedió la *soberanía* local. Arrogantes por el clima favorable, los cabildos desarrollaron una nueva estrategia consistente en solicitar la supresión de las visitas de los alcaldes entregadores porque las justicias ya apeaban los municipios y su presencia se calificaba de innecesaria y perniciosa. Este fenómeno surgió a la sombra de anteriores disposiciones de la Corona que les adjudicaban el papel de protectoras de la Cabaña Real, reinterpretándose los contenidos legislativos. Cundió el pánico entre los ganaderos, seguros de la desaparición de la trashumancia si las cañadas quedaban en manos de los intereses capitulares y vecinales. La Provisión de 24 de

²⁶ MARIN, F. (1998). "El lento declinar de la Mesta en el reinado de Felipe II: la conflictividad en el campo y en las Juntas Generales". *Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo XVI*. Madrid, pp. 67-114.

²⁷ *Relaciones de alcaldes entregadores*, libro 440, fol. 226 y ss.

diciembre de 1562 vino a tranquilizar los ánimos al ordenar que los magistrados cañadiegos ejecutaran las comisiones al margen de costumbres u ordenanzas²⁸.

Indicativas del recrudecimiento de los conflictos y la gradual voluntad de oposición a la Mesta, las apelaciones, escasas en lo sesenta, aumentaron de forma espectacular a partir de 1570. Las cuantiosas sanciones no sólo no disuadían a los condenados, sino que parecían servir de estímulo a la protesta y contestación. Las relaciones de alcaldes entregadores se llenaron de anotaciones en este sentido y la práctica se convirtió en una bandera habitual contra los abusos mesteños. Tras el abono de la multa, se recurría a otras instancias, en especial por los cabildos, que lo consideraban una inversión en el largo proceso de sacudirse privilegios, exigencias y compromisos. Este significado tuvo, por ejemplo, el recurso del concejo y vecinos de Mérida en 1574, ocupantes de la colada entre las dehesas de “Trujillanos” y “Valverde”²⁹.

En esa línea se enmarcaba la postura beligerante de ciudades y villas, los casos de Sevilla o Toledo, paladines de la resistencia activa intransigente y alegadoras de acotamientos generales, donde no cabían tratos de favor o preeminencias por unos códigos transgresores de los usos y costumbres, surgidos de ventajas irracionales y anacrónicas. La pasividad real llevaba las disputas al terreno particular al declinarse responsabilidad y competencia superior y cada causa se dirimía de manera individual, a modo de tesela del mosaico castellano de la insubordinación agraria. La concatenación de etapas seguía siempre las mismas pautas: negativa al reconocimiento de derechos de paso y pasto, declaración del coto, penas, prendas y agravios a rebaños y pastores y litigio en los tribunales; el veredicto o ejecutoria no importaba demasiado, ya que no había intención de cumplirlo. El sobradamente conocido final desembocaba en dos alternativas: el abandono categórico de esos itinerarios y pastizales³⁰ o la firma de concordias, renuncia taxativa por la Cabaña Real para salvaguardar el paso y pasto condicionado. El primer requisito era la supresión de la *libertad de tránsito*, junto a una cláusula de desistimiento a los privilegios, y el segundo consistía en reducir las marchas y desplazamientos a las vías pecuarias amojonadas, preservando los adhesados y elevando las ordenanzas locales a leyes de exclusiva referencia. La mayoría de las avenencias se daban en los invernaderos y principales arterias migratorias.

La oleada de roturaciones alcanzó los últimos rincones del campo. Si a mediados del quinientos ya se habían detectado frecuentes sembrados en abrevaderos, descansaderos, majadas o sendas, en tan sólo dos décadas apenas se hallaban sitios libres del arado, cercados o construcciones. Los pastores estantes y labradores más pobres fueron empujados hacia estos ramales y prados secundarios, aunque vitales en la trashumancia, por cabildos y otros vecinos instalados en las cañadas y veredas. De hecho, en los setenta, todas las comisiones de los alcaldes entregadores contemplaban la visita y devolución a pasto de las pequeñas entradas y ocupaciones³¹. Esta táctica expansiva iba paralela a la extensión impositiva, pues había que amparar los vedados con la aplicación de las penalizaciones por daños incluidas en las ordenanzas, del estilo de *la cercanía*³².

²⁸ *Cuaderno de leyes de Mesta de 1731*, primera parte, privilegio LIX, capítulo I, p. 196.

²⁹ *Relaciones de alcaldes entregadores*, libro 436, fols. 85 y ss.

³⁰ *Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731*, primera parte, privilegio LVI, capítulos I y II, pp. 167 y ss.

³¹ *Apeos y Visitas de Cañadas*, libro 355, fol. 183 y libro 361, fol. 68.

³² Por tales motivos sentenciaron, en 1561, al concejo de Pedroñeras (Cuenca) y, en 1566, al concejo de Ágreda (Soria); *Ejecutorias*, leg. 153, exp. 4; leg. 2, exp. 5.

El recrudecimiento de los conflictos

Los ochenta supusieron un periodo de máxima conculcación en lo referente a las roturaciones de cañadas y pasos, preludio de la gravedad posterior y momento de cambios drásticos en la Cabaña Real, sobrepasada por el ingente volumen de labrantíos y cercas. Comenzó a propagarse entre los hermanos la idea del imposible control y la preocupación por la pérdida de los itinerarios se transformaba paulatinamente en resignación. La convicción de que no había forma de aumentar la jurisdicción mesteña la política conservadora, poco combativa y adaptable para no alimentar conflictos, evidenciaban la asunción de la realidad agraria. Además, la prolongada sangría de pastizales y la restricción de la *libertad de tránsito* generaron la carestía de las hierbas, convertido en el problema principal de la ganadería durante el resto de la Edad Moderna. Este hecho desvió la atención del estado de las rutas a la disponibilidad pasteña, los altos precios y las alteraciones del mercado, lo que coincidió con la formación en el seno de la Institución de una oligarquía de acomodados y ricos ganaderos influyentes, insolidarios con los menos pudientes, poco rigurosos con la legislación cuando no se ajustaba con sus intereses y reformadores de las prácticas trashumantes tradicionales. Según su criterio, había que defender el entramado viario suficiente de acceso a los arrendamientos, pero disientían en el esfuerzo por mantener la red considerada secundaria. También parecía oportuno dosificar y centrar las gestiones realizadas por los procuradores generales de corte con el propósito de frenar la merma de prados y no desgastarse en reclamar la supervivencia de la totalidad de cañadas y pasos. La Real Cédula de 14 de octubre de 1580 para la vuelta a pasto de las dehesas roturadas ilegalmente se insertaba a la perfección en la nueva orientación cabañil³³.

La trasgresión de los usos comunales y la privatización de los terrenos, que arrojaron infinidad de caminos pecuarios, aumentaron con el episodio de la venta de baldíos, tan pernicioso para la Mesta³⁴. Nada importaba que los trazados sucumbieran con las enajenaciones, ni que ello comportara la anulación de la jurisdicción o la exención de visitas de los alcaldes entregadores, o la proliferación de ventas fingidas hasta engullir tierras y pasos libres. En poco tiempo, se consolidó el uso privativo de miles de fanegas y se desvanecieron las esperanzas de devolución a pasto o la conservación de la *libertad de tránsito*. Las relaciones de los magistrados cañadiegos recogían multitud de casos absueltos por este motivo, lo que sentaba precedentes incuestionables. Rastrojeras, barbecheras y pampaneras eran vendidas a particulares, al igual que ejidos o baldíos. La Real Cédula de 5 de mayo de 1590 excluía las cañadas de la venta y de las licencias concedidas por los agentes, aunque legitimaba sin distinción procedimientos y mandatos antecedentes. No tuvo efecto³⁵.

La pérdida definitiva de las *cañadas abiertas* en los lugares donde estorbaban intereses agrarios se tradujo en el confinamiento de los rebaños a las *cañadas cerradas*, prohibiéndose bajo duras sanciones traspasar los linderos. Incluso, se desarrollaron multas con apenas presencia durante décadas como *los 12 maravedíes de día y 24 de noche*, exigidas cuando se rebasaban los mojones y por el simple hecho de andar por el campo. Pocos ganaderos osaban no utilizar las rutas

³³ Ordenanzas, leg. 242, exp. 26.

³⁴ VASSBERG, D. E. (1986). *Tierra y sociedad en Castilla. Señores, "poderosos" y campesinos en la España del siglo XVI*. Barcelona: Crítica.

³⁵ Ordenanzas, leg. 241, exp. 74.

establecidas por el concejo y dirigirse hacia los pastizales de destino por sendas sin señalizar. Así sucedía en multitud de municipios, en especial en los invernaderos por la mayor movilidad de los hatos en esta época, y, con frecuencia, convivía con las *penas de cercanía*. Un buen ejemplo era la villa de Feria (Badajoz), condenada en varias ocasiones por los anteriores abusos contributivos³⁶.

En estos años, se mostró imposible disponer del entramado viario soñado por la Mesta y alternativo a la discutida *libertad de tránsito*. El existente, incompleto e insuficiente, adolecía de continuidad, pues en bastantes comarcas de sierras y extremos no había conexión entre las cañadas y el resto de vías pecuarias. Parecía un contrasentido, pero se asistía a la trashumancia entrecortada, fuente inagotable de conflictos. Ya no cabía la posibilidad de ampliar la jurisdicción con más apeos, nadie se acordaba de las *cañadas abiertas*, había crecido la extensión media de los sembrados³⁷ y la asiduidad de las visitas no disuadía a los infractores³⁸, no frenaba las reincidencias y apelaciones y no eliminaba los agravios, la fiscalidad ilegal o las ocupaciones de pasos secundarios. Las roturaciones de cañadas se extendían sin control y, por doquier, los alcaldes entregadores se encontraban sobrepasados por la amplitud de los sembrados y la cantidad de implicados, lo que comprometía a pueblos enteros. En 1582 se condenó a 861 vecinos de diferentes localidades en el Partido de León, que pagaron 376.690 maravedíes³⁹; algo similar sucedió en cualquiera de los otros tres partidos. La intensificación de las visitas y el mayor número de audiencias no solucionaron el problema porque las contravenciones superaron con creces los amojonamientos y causas atendidos por los magistrados mesteños⁴⁰.

La derrota y el final de las cañadas cerradas

Lo peor estaba por llegar. Las *cañadas abiertas* sucumbieron con el *Servicio de los Ocho Millones de Ducados* de 1591⁴¹. Las necesidades financieras de la Corona justificaron la concesión de todas las licencias solicitadas para hacer frente a la fiscalidad. Concejos y vecinos se lanzaron a roturar, arrendar la hierba y acotar en la más completa impunidad. Por primera vez, se relegaron de forma oficial los privilegios de la Cabaña Real y únicamente se mantuvieron las cañadas y pasos, *las cañadas cerradas*, a modo de santuarios insustituibles de acceso a las dehesas y arrendamientos. No se hizo por respeto hacia la trashumancia, ni tampoco por prudencia legislativa, sino que resultaban imprescindibles en esa coyuntura para el aprovechamiento pasteño. Ahora bien, no hubo pudor en cambiar trazados, cerrar o sembrar siempre que existiera interés en ello y se argumentara necesidad. La prolongación ilegal de los permisos o la renovación automática propició la consolidación de las excepciones temporales, demonizó la Cabaña Real⁴² y enterró las esperanzas de recuperación trashumante.

La inseguridad legal y procesal se apoderó de las visitas de los alcaldes entregadores⁴³, paralizados por las desconocidas facultades y sólo se centraron en los reconocimientos de las vías

³⁶ *Relaciones de alcaldes entregadores*, libro 489, fol. 1.

³⁷ Abundaban los de 50 a 100 fanegas. *Apeos y Visitas de Cañadas*, libro 358, fols. 316 y ss.

³⁸ Cada vez más numerosos; *ibidem*, libro 362, fols. 25, 30 y 79.

³⁹ *Relaciones de alcaldes entregadores*, libro 440, fols. 369 a 410.

⁴⁰ *Ibidem*, libro 475, fol. 26.

⁴¹ *Abecedario de provisiones...* libros 268 y 270.

⁴² AGS, *Patronato Real*, leg. 84, pp. 263 y ss.

⁴³ *Relaciones de alcaldes entregadores*, libro 442, fol. 38.

ganaderas que sabían exentas. No se aventuraban a formular sentencias sancionadoras o a amonestar para no despertar recelos y resistencia, provocar absoluciones o motivar costosos pleitos. Las denuncias de imposiciones, cultivos o adehesamientos inundaban las audiencias y juntas generales, pero no había forma de frenarlos, y entre ellos iban comprometidas las cañadas. Por otro lado, no se podía confiar en la protección de la Corona, engañosa con el doble juego de promulgar textos rotundos de apoyo a la Mesta y, al tiempo, no adoptar medidas de seguro cumplimiento⁴⁴. La presencia de los oficiales cabañiles resultó decisiva en estos años de caos y desacato, momento irrepetible para sacudirse la jurisdicción, establecer contribuciones a los foráneos, disuadir del paso con maltratos y prendas y recalcar la preeminencia de las ordenanzas locales en materia pecuaria. De hecho, las relaciones finiseculares fiscalizaban agravios y recorrían las cañadas, único vestigio de la vigencia de los privilegios⁴⁵.

[ÍNDICE]

⁴⁴ *Abecedario de provisiones...* libro 271, fols. 228 y ss.

⁴⁵ *Ejecutorias*, leg. 39, exp. 19; leg. 17, exp. 15; leg. 130, exp. 6.